

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

**Medellín, trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por GABRIEL ALFREDO GONZÁLEZ PÉREZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (**Radicado 05001-31-05-017-2021-00371-01**).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada Yesenia Cano Urrego, con tarjeta profesional No. 271.800 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

### ANTECEDENTES

El demandante pretende sea reconocido el retroactivo pensional de la pensión de invalidez otorgada desde el día siguiente a la data en la que se estructuró su estado de invalidez, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación, y las costas procesales.

El demandante en respaldo a las aspiraciones narró que por dictamen emitido por Colpensiones se calificó su pérdida de capacidad en un 52.98% con fecha de estructuración del 15 de diciembre de 1994. El 16 de marzo de 2020 elevó solicitud de pensión de invalidez ante Colpensiones, entidad que emitió la Resolución N° SUB 97918 del 24 de abril de 2020 reconociendo el derecho a partir del 01 de

mayo de 2020 por aducir no contar con la información de la EPS para la fecha de la estructuración, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. El 09 de noviembre de 2020 presentó solicitud de nuevo estudio conforme a un certificado expedido por el PAR ISS, recibiendo respuesta negativa por acto administrativo SUB 44796 del 19 de febrero de 2021 (Archivo 01).

Colpensiones al dar respuesta al libelo aceptó la mayoría de los hechos expuestos, pero con oposición a las pretensiones por considerar que si hay incapacidades debe concederse la prestación desde el día siguiente al último pago, por lo que hasta tanto no se arrime el certificado de incapacidades no es posible modificar la fecha de disfrute de la prestación. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: Inexistencia de la obligación de pagar retroactivo pensional, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses de mora o indexación, prescripción, buena fe de Colpensiones, compensación e imposibilidad de condena en costas (Archivo 06).

En sentencia que se profirió el 21 de enero de 2022, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que el demandante tiene derecho a que Colpensiones le reconozca el retroactivo de su pensión de invalidez a partir del 15 de diciembre de 1994 y hasta el 30 de abril de 2020. CONDENÓ a Colpensiones a pagar la suma de \$159.012.768 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 15 de diciembre de 1994 y el 30 de abril de 2020 con autorización de los descuentos en salud. CONDENÓ a Colpensiones a pagar los intereses moratorios a partir del 10 de noviembre de 2020 y hasta la fecha del pago real y efectivo de la obligación. CONDENÓ en costas a la demandada, fijando las agencias en derecho en la suma de \$2.500.000.

El mandatario judicial de la pasiva manifestó su disenso en cuanto a los intereses moratorios ordenados porque aduce que fue la parte demandante quien no entregó la información necesaria para tomar la decisión, indicando que en la nueva solicitud se enlistan los documentos anexados sin constancia de que obren en el expediente administrativo los pertinentes que de haber sido entregados o informado las condiciones de la época que impedían el reconocimiento de incapacidades, probablemente el retroactivo se hubiera reconocido. Señala que la entidad actuó de buena fe y por no contar con la prueba suficiente no puede entenderse que incurrió en mora pues no podía actuar hasta tanto el interesado

cumpliera su carga, por lo que pide que en este aspecto la sentencia sea revocada o en subsidio a ello, sea modificada la fecha desde la cual deben ser cancelados los intereses.

La Sala también conoce del asunto en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por el grado de consulta en favor de Colpensiones dada la decisión desfavorable a sus intereses y la ausencia de la alzada por parte de su representante judicial.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Estando por fuera de discusión el reconocimiento de la pensión de invalidez a Gabriel Alfredo González Pérez, la Sala plantea como problema jurídico a resolver a partir de los argumentos de la demanda, el recurso de apelación interpuesto y el conocimiento por el grado de Consulta, si hay lugar a conceder el retroactivo pensional desde el momento en que fue estructurado el estado de invalidez del pensionado con el debido reconocimiento de los intereses moratorios, además de las costas procesales.

Pues bien, para definir esta controversia téngase en cuenta que dada la fecha de evaluación de la pérdida de capacidad laboral del señor Gabriel Alfredo González Pérez, que lo fue el 16 de enero de 2020 (Págs. 10-13 Archivo 01), la norma aplicable resultaba ser el Decreto 1507 de 2014 mismo que indica lo siguiente frente a la fecha de estructuración:

*“...es la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos”* y en coherencia con lo que regula el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, el pago de la pensión de invalidez de origen común procederá desde la data en que se produce dicho estado, disposición que no puede leerse aisladamente, sino que debe interpretarse en forma sistemática

incluyendo lo previsto en el artículo 10 del Decreto 758 de 1990 que reza: “*Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio*”, regulación que debe entenderse incorporada al reglamento de la seguridad social de 1993, porque no es contraria a su teleología y principios como se previó en el artículo 31 ibídem, pues propende por evitar que una contingencia sea amparada dos veces.

Tal excepción continúa vigente, por cuanto ha sido postura pacífica y reiterada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que un afiliado al Sistema Integral de Pensiones no puede recibir dos beneficios del sistema cuando los mismos parten del mismo evento, resultando contrario al sentido común pretender recibir el pago de una mesada pensional por invalidez sobre un tiempo durante el cual el Sistema de Salud le reconoció igualmente subsidio por incapacidad fruto de la imposibilidad de recibir su salario por presentar incapacidad laboral por enfermedad, sin que ello imposibilite que se reconozca el derecho a la pensión de invalidez descontándole al momento de su pago lo que haya recibido por concepto de subsidio de incapacidades (Ver SL4299-2022, SL5170-2022, SL4916-2021, SL910-2020, SL1562-2019).

Lo anterior quiere decir que la prestación pensional se sufragará a partir del día siguiente a cuando se recibió el subsidio económico de la última incapacidad laboral, dada la incompatibilidad legal que impide que se reconozcan mesadas pensionales y, a su vez, el valor de tales incapacidades.

Bajo las anteriores previsiones, se tiene que del material probatorio obrante al interior del plenario, se extrae que a partir de la solicitud del señor González Pérez efectuada el 16 de marzo de 2020, Colpensiones decidió otorgar el derecho prestacional a partir del 01 de mayo de 2020 aduciéndose en el acto administrativo que aunque la fecha de estructuración data del 15 de diciembre de 1994, en el expediente pensional no se observan certificados expedidos por la EPS, requiriendo se aporte el certificado respectivo con el historial de incapacidades (Pág. 22 Archivo 01).

Pues bien, atendiendo la incompatibilidad que en efecto acarrea percibir subsidios por incapacidad con la pensión de invalidez, se tiene que resultaba de

trascendencia tener clara esa situación del actor, siendo preciso indicar que las incapacidades sólo pueden acreditarse a través del registro médico respectivo que emita la Entidad Promotora de Salud a la que se encuentra vinculado el trabajador (Ver SL4947 de 2021).

Al respecto, teniendo en cuenta que la fecha de estructuración para este caso fue establecida para el 15 de diciembre de 1994 (Págs. 10-13 Archivo 01) debe decirse que el sistema de salud vigente en Colombia empezó a implementarse en enero de 1995 en desarrollo de la Ley 100, expedida en diciembre de 1993, por lo que en precedencia en el país existía el sistema nacional de salud a través de unas secretarías seccionales de salud con una cobertura que se prestaba a través de tres escenarios: el Seguro Social de una parte, el propio sistema a través de los hospitales públicos y la medicina prepagada.

En ese orden, si acudimos a la prueba documental, tenemos que el PAR ISS en una respuesta que emitió el 10 de julio de 2020, ante petición del demandante de la expedición de las incapacidades expedidas por la antigua EPS del ISS, dio a conocer que los temas referentes al ítem de salud solo disponía de información para el período comprendido entre enero de 1995 y julio de 2008, fecha en la cual dejó de tener población afiliada, agregando no haberse hallado ningún registro por nombre o número de identificación por concepto de incapacidades ni existe registro de historia clínica (Págs. 39-41 Archivo 01). La misma entidad por medio de la certificación N° 286 hizo constar la ausencia de algún registro asociado a Gabriel Alfredo González Pérez, con la claridad de no reposar tampoco evidencia de daño o deterioro en documentos a su nombre o de procesos de eliminación o destrucción (Pág. 42 Archivo 01 y Pág. 51 del Archivo 06). Igualmente, obra documental emitida por la EPS Seguro Social donde se plasma que el actor estuvo afiliado en calidad de cotizante en salud desde el 01 de enero de 1995 y hasta el 30 de junio de 1999 (Pág. 43 Archivo 01 y Pág. 52 Archivo 06). Se arribó una respuesta que libró la Nueva EPS vía mail donde se anuncia que revisado el sistema de información el señor González no ha presentado afiliación a la Nueva EPS y que se encuentra activo en la EPS Suramericana (Pág. 46 Archivo 01 y Pág. 260 Archivo 06), entidad última que a su vez dio cuenta que el afiliado en mención no tenía registradas incapacidades (Pág. 47 Archivo 01 y Pág. 332 Expediente Administrativo). Adicionalmente, el historial laboral y clínico del demandante incluidos en la carpeta pensional de la entidad convocada dan cuenta

que desde el año 2012 estuvo vinculado al Sistema en el Régimen Subsidiado (Pág. 601 y ss. Archivo 06).

Ahora, como bien lo pregonó la Juez de Instancia, se hace también necesario acudir al contenido del Certificado de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones (Archivo 07), en donde se precisa que *“si bien es cierto, la EPS Seguro Social certificó afiliación y no pago de incapacidades por el período desde el 01/01/1995 al 30/06/1999, también lo es que no existe certeza de afiliación y/o pago de incapacidades a partir del 01 de julio de 1999 al 30 de abril de 2020”*.

En ese orden, si se verifican las probanzas en conjunto con el concepto de la entidad, se tiene que ésta ha errado en los fundamentos para negar el retroactivo pensional del actor en tanto: 1) la afiliación a la EPS Seguro Social se dio a partir del 01 de enero de 1995 y hasta junio de 1999, certificando la ausencia de registro de incapacidades, lo que de hecho, es aceptado por Colpensiones de manera expresa en el certificado de no conciliación arrojado en el trámite del proceso, siendo un despropósito exigir previo a 1995 certificado de una EPS con el fin propuesto por la demandada en la resolución de reconocimiento. Y 2) Conforme al historial laboral (Págs. 598-613 Archivo 06), el actor estuvo cesante en el sistema precisamente a partir de julio de 1999, retomando su calidad de afiliado en el año 2012 pero mediante el régimen subsidiado, en el que valga decirse, no se expiden incapacidades toda vez que ese reconocimiento solo surge para los afiliados cotizantes del Régimen Contributivo - artículo 206 Ley 100 de 1993-, perteneciendo en esa calidad hasta el mes de diciembre de 2019, data en la que registra su última cotización al Sistema según reporte actualizado a 09 de noviembre de 2020.

En ese orden, no se verifica información pendiente por suministrar, pues en coherencia con la ausencia que endilga la contraparte, la documental que se arribó al plenario y que de paso fue conocida por la entidad pues integra el expediente administrativo que aportó como probanza, permite advertir que en nombre del actor no se han prescrito incapacidades desde el momento en que se estructuró su estado de invalidez el 15 de diciembre de 1994, contándose con todos los mecanismos demostrativos para que desde la reclamación respectiva se diera reconocimiento del retroactivo no desde su ingreso a nómina, sino desde

la dirección del ya mencionado artículo 40 de la ley 100 de 1993 en su último inciso, por no existir prestación incompatible que en igual tiempo percibiera el hoy pensionado.

En ese norte, la Sala concluye que el pago de la pensión de invalidez debe realizarse desde la fecha de estructuración de la misma, lo que implica la causación de un retroactivo en favor de Gabriel Alfredo González Pérez por la suma de \$159.015.750 liquidado entre el 15 de diciembre de 1994 y el 30 de abril de 2020 conforme se detalla a continuación, cálculo realizado con base en 14 mesadas anuales y a partir de un valor pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente que no hizo parte de la discusión que promovió esta acción jurídica, que en esta instancia resulta en poco superior al encontrado por la *A quo*, pero que no es objeto de ser modificado por no ser un punto de apelación de la activa, e ir ello en contravía de los intereses de Colpensiones en favor de quien se surte la consulta.

AÑO	VR. MESADA	N° MESADA	TOTAL
1994	\$ 98.700	0,53	\$ 52.640
1995	\$ 118.934	14	\$ 1.665.076
1996	\$ 142.125	14	\$ 1.989.750
1997	\$ 172.005	14	\$ 2.408.070
1998	\$ 203.825	14	\$ 2.853.550
1999	\$ 236.438	14	\$ 3.310.132
2000	\$ 260.100	14	\$ 3.641.400
2001	\$ 286.000	14	\$ 4.004.000
2002	\$ 309.000	14	\$ 4.326.000
2003	\$ 332.000	14	\$ 4.648.000
2004	\$ 358.000	14	\$ 5.012.000
2005	\$ 381.500	14	\$ 5.341.000
2006	\$ 408.000	14	\$ 5.712.000
2007	\$ 433.700	14	\$ 6.071.800
2008	\$ 461.500	14	\$ 6.461.000
2009	\$ 496.900	14	\$ 6.956.600
2010	\$ 515.000	14	\$ 7.210.000
2011	\$ 535.600	14	\$ 7.498.400
2012	\$ 566.700	14	\$ 7.933.800
2013	\$ 589.500	14	\$ 8.253.000
2014	\$ 616.000	14	\$ 8.624.000

2015	\$ 644.350	14	\$ 9.020.900
2016	\$ 689.455	14	\$ 9.652.370
2017	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	4	\$ 3.511.212
TOTAL			\$ 159.015.750

Estos guarismos no estuvieron afectados por el fenómeno de la prescripción en tanto la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación laboral tiene decantado con suficiencia que la pensión de invalidez solo puede reclamarse, una vez se tenga certeza de la calificación y definición de la pérdida del 50 % o más de capacidad laboral, emitida por una autoridad competente y que es solo en ese momento que adquiere la calidad de exigible por ser a partir de cuando se producen los efectos jurídicos en lo que a las prestaciones se refiere (Ver SL1562-2019 reiterada en la SL3287-2022 y SL4299-2022) y en el asunto se tiene que el hecho dañoso que ocasionó la pérdida de la capacidad del afiliado se fijó en experticia que se rindió el 16 de enero de 2020 (Págs. 10-13 Archivo 01), la reclamación administrativa se elevó el 16 de marzo de 2020 (Págs. 15-16 Archivo 01), el trámite administrativo se agotó con la Resolución SUB 44796 del 19 de febrero de 2021 (Págs. 32-38 Archivo 01), y la demanda se presentó el 10 de agosto de 2021.

Frente a los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, basta recordar que su imposición conforme lo ha reiterado esta Sala, proceden siempre y cuando haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en la conducta del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional, en tanto su imposición es de connotación simplemente resarcitoria, encaminada a aminorar los efectos adversos que se producen al acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones.

En ese sentido, resulta pertinente recordar que la mora no solo constituye un simple retardo, una dilación o tardanza en el cumplimiento de una obligación, sino una conducta contraria al derecho social que trae como consecuencia la indemnización, que no es otra cosa que la monetización de la garantía prestacional insatisfecha, y que en materia de pensiones a partir de la promulgación de la Ley 100 de 1993, fue graduada con severidad por el legislador

en el artículo 141, al imponer el pago de la tasa máxima de interés moratorio vigente, no existiendo mérito para eximir a la convocada de este rubro en tanto, desde el expediente administrativo se observa su conocimiento pleno de la documental que sirvió de apoyo para en este escenario judicial resolver el derecho del actor a percibir su retroactivo desde fecha previa al ingreso en nómina, condena que en ese orden habrá de confirmarse.

Ahora, teniendo en cuenta que Colpensiones tuvo acceso a toda la documental para definir en derecho el asunto del actor desde la solicitud que se radicó el 09 de noviembre de 2020 (Págs. 24-28 Archivo 01) pues ello así se desprende del contenido del escrito y las fechas de expedición de cada uno de los certificados, es partir de esa dada que deben contabilizarse los cuatro meses, mismos que vencieron el 09 de marzo de 2021, por lo que este concepto sancionatorio tiene cabida a partir del 10 de marzo de 2021 y no desde el 10 de noviembre de 2020 como lo adujo la falladora, porque se constituye en irrazonable que la entidad pudiera emitir una decisión en el término de un día contado desde que se presentó la documental completa para el reconocimiento del retroactivo pensional, debiendo en este punto modificarse la decisión revisada en consulta.

Sobre las costas procesales, se tiene por decir que es pertinente recordar, costas son aquellas erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, dentro de las cuales se incluyen las agencias en derecho, valor que el juzgador le da al trabajo del abogado que ha triunfado en el trámite del conflicto, que deben ser asumidas por la parte que resulte vencida judicialmente. De esta forma, la condena en costas contiene una obligación procesal que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir, en tanto la contraparte, al interponer el recurso de casación, lo compele a seguir atendiendo el proceso y a realizar nuevas erogaciones. (AL3132-2017, AL3612-2017 y AL5355-2017 y AL2924-2020).

En ese orden, el Art. 365 del Código General del Proceso, norma aplicable en materia laboral conforme a las voces del Art. 145 de nuestro estatuto procesal del trabajo y de la seguridad social, establece en su regla 1ª que: “*se condenará en costas a la parte vencida en el proceso*”, por lo que se trata de una condena que opera de manera objetiva, siendo necesario tener en cuenta además que en el asunto la condena impuesta a Colpensiones, tuvo apoyo en su actuar negligente

u omisivo, en la medida que como quedó dicho tenía bajo su poder las herramientas suficiente para definir lo hoy resuelto con la consecuencia de impulsar este trámite en el que tampoco hubo un comportamiento proactivo para impulsar el reconocimiento en debida forma y evitar el desgaste procesal, no existiendo en esos términos razones para exonerar a Colpensiones de esta carga procesal, por lo menos en la primera instancia.

De manera que, la sentencia venida en apelación y consulta habrá de ser modificada en cuanto a que los intereses moratorios condenados deben reconocerse a partir del 10 de marzo de 2021 y confirmada en lo demás.


Sin costas en esta instancia por las resultas de la alzada.

#### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **MODIFICA** la sentencia objeto de apelación y consulta disponiendo el reconocimiento de los intereses moratorios a cargo de Colpensiones a partir del 10 de marzo de 2021. **CONFIRMA** en lo demás. Sin costas.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310501720210037101</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>GABRIEL ALFREDO GONZALEZ PEREZ</b>
<b>Demandado:</b>	<b>COLPENSIONES</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>13/02/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA Y MODIFICA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 14/02/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario